

Metodología para elaborar la Política Estatal Anticorrupción de Baja California Sur.**I. Introducción:**

La Política Estatal Anticorrupción (PEA), es un instrumento clave que permitirá el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Baja California Sur.

Dicho documento, debe contener el diagnóstico y las prioridades mínimas que orienten la actuación de los integrantes del SEA y de todos los entes públicos del estado de Baja California Sur, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos.

La emisión de la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y su aprobación por parte del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ponen sobre la mesa, un par de retos que deberán encarar las instituciones que integran el SNA en todo el país.

El primero de ellos, se centra en la necesidad de desarrollar pautas y mecanismos homologados de implementación de la política, que permitan traducir las prioridades establecidas en la propuesta de PNA en acciones, proyectos y compromisos con responsables, plazos y productos claros; que generen resultados en el corto, mediano y largo plazo.

En segundo lugar, se reconoce un reto relacionado con el proceso que deberán seguir los integrantes de los 32 Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), para el diseño, formulación, implementación y evaluación de sus respectivas Políticas Estatales Anticorrupción (PEA).

El SNA, puso a disposición de los SEA, una guía que ofrece algunas reflexiones y recomendaciones generales para apoyar el proceso de diseño de las PEA. Dichos elementos sugieren una ruta para la elaboración de políticas anticorrupción, a partir de dos criterios fundamentales, que son:

1. *La alineación de las propuestas de la PEA a los contenidos estratégicos incluidos en la propuesta de PNA.*
2. *La contextualización de temas, diagnósticos y prioridades desarrollados en la propuesta de PNA a la realidad y particularidades específicas de cada entidad federativa.*

La contraposición de ambos principios (alineación y contextualización) establece un marco básico para el diseño de las propuestas de PEA a través del cual:

- A. La estructura y los contenidos esenciales de la propuesta de la PNA (ejes, temas,

prioridades) establecen mínimos que son considerados para su adopción (directa o indirecta) en la PEA. Estos elementos permitirán establecer un acuerdo compartido a escala nacional sobre el problema de la corrupción, además de que favorecerán la homologación de las pautas de implementación, seguimiento y evaluación de las políticas en todo el país.

B. La incorporación de contenidos adicionales y que atiendan las particularidades locales, mismos que deberán definirse a partir de procesos de desarrollo de políticas que combinen metodologías participativas con análisis sistemáticos de información y evidencia generada por instituciones y organizaciones a nivel estatal.

C. Las principales recomendaciones propuestas desde la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) para el diseño de la PEA.

Este doble proceso de alineación y contextualización para el diseño de PEA se sintetiza en 10 recomendaciones tomadas directamente de la guía publicada por el SNA.

Con base en lo anterior, la presente metodología se divide en tres apartados en los que se analiza:

1. La naturaleza del proceso de diseño de políticas públicas, y el sustento normativo para el diseño de la Política Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (PEABCS)
2. La relevancia de los procesos de alineación y de contextualización de las PEA, en el contexto de la propuesta de PNA.
3. Las principales recomendaciones propuestas desde la SESNA para el diseño de PEA.

II. Marco conceptual y normativo.

II.1. Marco Conceptual:

Las políticas públicas pueden entenderse como *"un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas, que representan el modo en el que el gobierno realiza de manera permanente y estable las funciones públicas y atiende los problemas públicos: un patrón de actuación"*¹. Desde esta perspectiva, la política pública

¹ Guía para el diseño de Políticas Estatales Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

establece los principios estratégicos -alineados a un objetivo de interés público- que tienen como propósito fundamental la atención y eventual solución de un problema público considerado como relevante por la sociedad.

A partir de esta idea, el proceso de desarrollo de cualquier política pública -conocido como su "*ciclo de vida*" implica la realización de al menos tres actividades, que son:

Diseño, que supone la identificación y definición del problema público que se busca atender, la formulación de las soluciones que formarán parte de la política y su adopción través de un proceso de toma de decisiones.

Implementación, que supone la ejecución de las soluciones formuladas en la fase de diseño, a través de acciones sistemáticas con responsables y recursos específicos, alineados con los objetivos de la política pública.

Evaluación, que implica una valoración sistemática de distintos atributos de la política pública (eficiencia, eficacia, calidad, economía, etcétera), así como de su aportación marginal para la atención del problema público para la que fue diseñada.

La fase de diseño de una política es una etapa muy relevante del proceso, ya que en ella se define (tanto en alcance como en magnitud) la naturaleza del problema público que se busca atender; se construyen las potenciales alternativas de solución (expresadas en términos de objetivos o instrumentos de política); además de que se logra un consenso entre las autoridades relevantes sobre la necesidad de adoptar el curso de acción propuesto.

Con lo anterior, en esta etapa de diseño se busca:

- A. Alcanzar un consenso valorativo y conceptual sobre la o las dimensiones del problema público que se busca atender.
- B. Identificar un conjunto de prioridades o instrumentos que, con base en el análisis

realizado, causalmente se orienten a la atención efectiva del problema.

La búsqueda de estos consensos y soluciones compartidas implica procesos técnicos y políticos, en los que la evidencia, el diálogo y la persuasión juegan un papel muy relevante. Estas dos dimensiones básicas del diseño (la técnica y la política) se tornan particularmente relevantes en ciertos tipos de problemas públicos (conocidos en la literatura como wicked problems), en los que existe confusión o bajo acuerdo sobre su definición, en donde la evidencia marca vías de solución múltiples -y en ocasiones contradictorias-, y en donde existe una 'masa crítica' de actores interesados de participar en la definición de la política. Este es el caso de las políticas anticorrupción nacional y estatal.

En casos como los arriba mencionados, resulta particularmente relevante incorporar de forma simultánea labores técnicas (que impliquen el análisis detallado de evidencia) y de diálogo político que favorezcan la construcción de acuerdos entre los distintos actores sobre la definición y el alcance del problema público, así como de la ruta de solución. En términos de diseño, estos procesos técnicos y de diálogo deberán permitir elaborar:

1. **Una caracterización del problema público**, en la que se identifiquen de forma general sus atributos definitorios, así como las principales causas que detonan su persistencia.
2. **Un diagnóstico pormenorizado del problema**, que permita dimensionar su magnitud y alcance en distintos ámbitos de la esfera pública.
3. **Un conjunto de potenciales soluciones**, que detallen una ruta amplia de trabajo en términos de los ámbitos e instrumentos que se pueden emplear para la solución del problema público.

Figura 1. Elementos básicos de diseño de la propuesta de la PNA que deberán ser tomados como base para el diseño de la PEABCS.

Definición.

La corrupción se define como un orden social que basa sus formas de intercambio en relaciones particulares y de favoritismo.

Atributos Básicos de la Corrupción

Corrupción como Ilegalidad

Corrupción como Orden Social

Problema Público: Incapacidad (Tanto en el ámbito estatal como social) para controlar la corrupción. Corrupción como consecuencia de riesgos institucionales y sociales subyacentes.

Causas de la persistencia del problema público (Ejes estratégicos)

1. Altos niveles de impunidad.
2. Persistencia de espacios de discrecionalidad que propician la arbitrariedad.
3. Débil involucramiento social en el control de la corrupción.
4. Distorsión de las interacciones entre gobierno y sociedad.

Alternativas de solución.

40 prioridades de política pública, agrupadas por cada uno de los cuatro ejes estratégicos. Cada prioridad cuenta con elementos para identificar características que pueden ser considerados por algunos entes públicos y sus homólogos en las entidades federativas.

Instrumentos de política.

Cada una de las prioridades pueden clasificarse en cinco tipos de instrumentos:

1. Producción (generación, procesamiento, aprovechamiento, difusión).
2. Capacidades (generación, adecuación, fortalecimiento).
3. Herramientas (plataformas, productos o entregables específicos).
4. Procesos (generación, reingeniería, evaluación, medición).
5. Rendición de cuentas (creación o adecuación de mecanismos).

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para el Diseño de Políticas Estatales Anticorrupción, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

II.2. Marco Normativo:

El artículo 7 de la Ley General del SNA (LGSNA) establece que uno de los cuatro pilares del SNA está constituido por los SEA. Sobre esta misma base, el artículo 36 de la misma ley señala que las entidades federativas legislarán lo relativo a la integración, atribuciones y funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo algunas bases, entre las que destacan las siguientes que resultan relevantes para el desarrollo de la PEABCS.

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. Decreto 2432, 10 de Abril de 2017:

"Artículo 1: La presente Ley es de orden público, de observancia en el Estado de Baja California Sur y se expide en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 160 Bis de la Constitución Política del Estado, y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales disponen que las entidades federativas constituirán Sistemas Locales Anticorrupción, los cuales contarán con una integración y atribuciones equivalentes a las del Sistema Nacional Anticorrupción.

..."

"Artículo 6. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno del Estado, para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los Entes públicos competentes del Estado.

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas."

Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija:

"Artículo 1. ...

La presente Ley tendrá por objeto establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción".

“Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Entes públicos que integran el Sistema Estatal”.

Capítulo II Principios que rigen el servicio público

Artículo 5. Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

Los Entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público”.

TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Capítulo I Del objeto del Sistema Estatal Anticorrupción

Artículo 6. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno del Estado, para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador deberán ser implementadas por todos los Entes públicos competentes del Estado.
...”

Atribución del Comité Coordinador para establecer las políticas públicas en la materia, y atribución de la Secretaría Ejecutiva de dar seguimiento a la implementación de estas

“Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer las bases y mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional, y tendrá a su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas para la prevención, detección, combate y sanción de la corrupción.”

“Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:



- I. Elaborar su programa de trabajo anual, el cual deberá estar concluido a más tardar en el mes de noviembre del año anterior;
- II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;
- III. El diseño, aprobación y promoción de la política estatal en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. Esta política deberá atender por lo menos, a la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público;
- IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
- V. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;
- VI. Establecer las bases para la determinación de perfiles de las áreas de riesgo de los distintos entes públicos;
- VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales;
- VIII. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos;
- IX. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización, control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
- X. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;
- XI. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes, ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley;
- XII. El establecimiento de mecanismos de coordinación con los integrantes del Sistema Estatal;



- XIII. El seguimiento, determinación y la aplicación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información, hechos por el Sistema Nacional que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.
- XIV. El establecimiento y la determinación de los mecanismos de suministro y actualización de la información que se le deberá transmitir al Sistema Nacional para que éste a su vez la almacene en la Plataforma Digital Nacional.
- XV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y del Sistema Nacional;
- XVI. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación entre las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los Órganos internos de control y entidades de fiscalización la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;
- XVII. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, accedan a la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones;
- XVIII. Participar, conforme a las leyes en la materia, en los mecanismos de cooperación nacional e internacional para el combate a la corrupción, a fin de conocer y compartir las mejores prácticas nacionales e internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno; y, en su caso, compartir a la comunidad nacional e internacional las experiencias relativas a los mecanismos de evaluación de las políticas anticorrupción, y
- XIX. Las demás señaladas por esta Ley."

Atribución del Comité de Participación Ciudadana para opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política

"Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar y encauzar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal."

"Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Aprobar sus normas de carácter interno;
- II. Elaborar su programa de trabajo anual;



- III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;
- IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley;
- V. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y nacional y las políticas integrales así como acceder a la información que genere el Sistema Estatal, por conducto del Secretario Técnico;
- VI. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:
 - a) Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
 - b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Estatal y su coordinación para la integración de la información del Estado a la Plataforma Digital Nacional.
 - c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley.
 - d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.
- VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad sudcaliforniana participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;
- VIII. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
- IX. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política local y nacional;
- X. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos;
- XI. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Auditoría Superior del Estado;
- XII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;
- XIII. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;

- XIV.** Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;
- XV.** Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el Estado;
- XVI.** Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana, y
- XVII.** Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal."

Objeto de la Secretaría Ejecutiva como instancia de apoyo técnico para el desempeño de las funciones del Comité Coordinador

"Artículo 24. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en La Paz, Estado de Baja California Sur. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines, y por lo tanto, el Congreso del Estado deberá asignarle cada año el presupuesto para el cabal ejercicio de sus funciones."

"Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones conforme a la presente Ley."

"Artículo 29. El órgano de gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva en el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo. Asimismo, tendrá la atribución indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley."

Atribución de la Comisión Ejecutiva de la elaboración de las propuestas de políticas integrales que será puesta a consideración del Comité Coordinador

"Artículo 30. La Comisión Ejecutiva estará integrada por:

- I.** El Secretario Técnico, y



- II. El Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento como Presidente del mismo."

"Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

- I. Las políticas en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;
- II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción así como a las políticas a que se refiere la fracción anterior;
- III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto de las políticas a que se refiere este artículo;
- IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción en el marco de la Plataforma Digital Estatal;
- V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
- VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;
- VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y
- VIII. Las bases de coordinación con el Sistema Nacional."

Atribución del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva de elaborar proyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales que serán discutidas por la Comisión Ejecutiva

"Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades generales que se determinen en el Estatuto Orgánico correspondiente.

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:

- I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;
- II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;

- III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables;
- IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador;
- V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción VII del artículo 9 de esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas;
- VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva;
- VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva;
- VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación;
- IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;
- X. Solicitar información pertinente a los Entes públicos para su incorporación a la Plataforma Digital Estatal;
- XI. Diseñar, implementar y administrar la Plataforma Digital Estatal, con base en las medidas y protocolos que dicte el Sistema Nacional;
- XII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción, y
- XIII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva."

III. Alineación y Contextualización, para el diseño de la PEABCS.

La PEABCS permitirá definir y entender el problema de la corrupción en Baja California Sur, y dará pauta para establecer compromisos de política pública claros. Por ello, durante su diseño es importante contar con criterios que contribuyan a la elaboración de un diagnóstico robusto y estrategias de largo plazo para guiar el esfuerzo estatal.

hacia un mismo sentido, que permita controlar el fenómeno de la corrupción considerando las condiciones del contexto local, pero asegurando una visión coordinada en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el proceso de diseño de la PEABCS debe asegurarse, en primer lugar, una adecuada y armónica alineación de esfuerzos nacionales y estatales; a través de procesos de adopción directa o indirecta de los contenidos de la propuesta de PNA.

Alinear la PEABCS a la propuesta de la PNA fortalecerá las acciones y esfuerzos estatales, así como la coordinación del SNA en su conjunto, facilitando la implementación, evaluación y monitoreo de políticas anticorrupción en todo el país, estableciendo una agenda de Estado en la materia.

Para su implementación, la PEABCS, al estar alineada a la propuesta de PNA, deberá llevarse a cabo mediante el mismo modelo: contará con cuatro programas de implementación uno para cada eje estratégico. De esta forma, mediante el monitoreo se realizará un seguimiento a las acciones definidas en cada uno de los programas de implementación que se deriven de ella, así como a los resultados que de ellas se obtengan.

La alineación permitirá tener claridad sobre la contribución del SEA en Baja California Sur (SEABCS) al logro de los objetivos planteados a nivel nacional a través de acciones que constituyan un esfuerzo coordinado y que deriven de las 40 prioridades de política pública contenidas en la propuesta de la PNA.

IV. Principios de Alineación en el Diseño de la PEABCS a la propuesta de PNA

Con lo anterior, el propósito de la alineación de las PEA a la propuesta de la PNA es establecer una base que permita contar con metas comunes para el control de la corrupción que detonen la colaboración y la coordinación para la generación de impactos positivos para la población.

Principio I. Visión estratégica de largo plazo.

Debe enfatizarse una visión de largo plazo, donde se plasme el diagnóstico y las prioridades de política necesarias para la solución del problema público, sin importar si dichos instrumentos deben ser implementados en el corto, mediano o largo plazos.

Desde una óptica de planeación, deberá servir de 'paraguas' en los que se establezcan los pasos necesarios para enfrentar el problema de la corrupción en el Estado y; a partir de las prioridades ahí propuestas; se establezcan los proyectos concretos de implementación que guardarán una visión progresiva en la medida que los recursos y la voluntad política así lo permitan.

Elementos de estructura de la PEABCS:

- A. **Problematicación del fenómeno de la corrupción.** Con la visión centrada en las dos causas principales: corrupción como impunidad y como norma social.
- B. **Diagnóstico.** Deberán retomarse las líneas de análisis elaboradas en la propuesta de la PNA, complementándose con los insumos derivados de los procesos de análisis realizados por la Secretaría Ejecutiva del SEABCS (SESEA) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEABCS.
- C. **Prioridades de política pública.** Articuladas en torno a ejes estratégicos alineados al diagnóstico realizado.

Principio II. Utilizar los datos, la evidencia presentada y los insumos generados en el proceso de elaboración de la propuesta de PNA.

Un elemento clave en el diseño de la PEABCS es contar con evidencia suficiente y derivada del análisis de diversas fuentes cuantitativas y cualitativas, que permitan realizar un adecuado análisis de las distintas problemáticas que inciden en la incapacidad para controlar la corrupción en el Estado.

Producto del proceso de elaboración de la propuesta de la PNA, se generaron las siguientes fuentes de información, que pueden resultar útiles para la elaboración de los diagnósticos de las PEA:

- I. Anexo Estadístico de la propuesta de PNA, que contiene 55 tablas con información recopilada y analizada proveniente de fuentes oficiales y de estudios elaborados por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
- II. Una base de datos con 465 líneas de información que contiene las acciones sugeridas en los documentos propuesta, elaborados por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y las Secretaría de la Función Pública (SFP).
- III. Una base de datos con poco más de 2,200 líneas de información que contiene estadística relacionada con el fenómeno de la corrupción, elaborada producto de la colaboración entre la SESNA y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- IV. Un reporte de evidencias cualitativas sobre la corrupción, elaborada producto de la colaboración entre la SESNA y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

UNAM.

- V. Una base de datos que contiene la recopilación de 156 recomendaciones internacionales identificadas en los convenios internacionales en la materia, firmados por nuestro país.
- VI. Una base de datos con poco más de 260 recomendaciones generadas del análisis de los estudios entregados por los integrantes del Consejo Consultivo durante la elaboración de la propuesta de la PNA.
- VII. Una base de datos con los registros completos de todas las participaciones en la Consulta Ciudadana en línea.
- VIII. Las ocho relatorías de los Foros Regionales realizados en el marco de la Consulta Pública de la Política Nacional Anticorrupción.



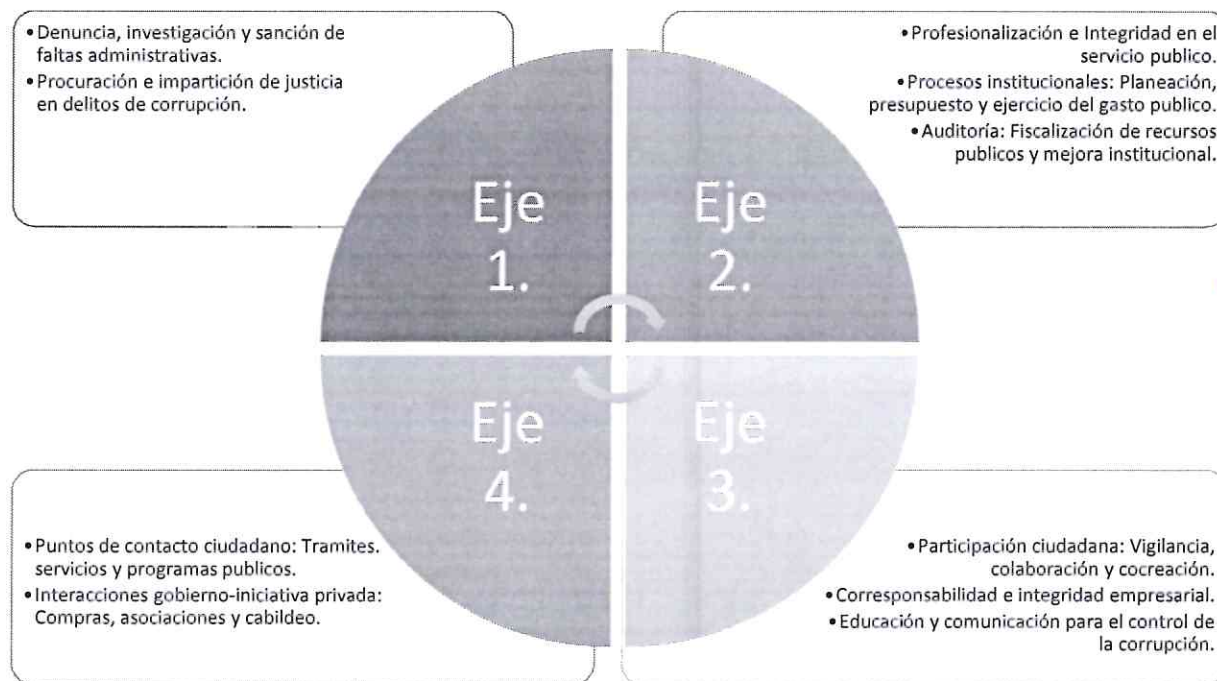
Principio III. Mantener los 4 ejes estratégicos de la propuesta de PNA: Impunidad, Arbitrariedad, Involucramiento e Interacciones.

Un aspecto clave que permite asegurar la congruencia entre políticas diseñadas e implementadas desde una perspectiva intergubernamental, es el desarrollo de patrones de actuación homogéneos que permita enfrentar problemas comunes con ópticas nacionales, federales y locales. En materia de control de la corrupción, esta congruencia de perspectivas resulta particularmente relevante si se considera que cada ámbito y orden de gobierno cuenta con responsabilidades claras en materia de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Sobre esta base, se considera esencial que en el desarrollo de las propuestas de la PEA se preserve la estructura básica en 4 ejes estratégicos.

El mantenimiento de estos elementos de la propuesta de PNA permitirá orientar en una misma dirección los esfuerzos realizados por los distintos entes públicos del país en materia de control de la corrupción, permitiendo obtener resultados de valor en el mediano plazo.

Figura 2. Ejes Estratégicos de la PNA que deberán mantenerse en la PEABCS



base en la estructura de cuatro ejes estratégicos que hasta el momento se tienen de la propuesta de PNA, por lo que mantener los 4 ejes en la PEABCS facilitara los ejercicios de evaluación.

Sin embargo, se mantiene la posibilidad de desarrollar ejes estratégicos adicionales, dependiendo de la información adicional (cualitativa y cuantitativa) que se recabe durante el proceso de integración de la PEABCS.

Principio IV. Incorporar, previo análisis detallado, las 40 prioridades de política consideradas en la PNA.

Realizar un análisis que permita determinar la viabilidad de incorporar cada una de las 40 prioridades que integran la parte sustantiva de la propuesta de PNA.

Las prioridades son las recomendaciones de política que se identificaron como imprescindibles a partir de toda la evidencia mostrada en la propuesta y de los resultados del proceso de política pública y se clasifican en cinco categorías de acuerdo con el tipo de instrumento que se busca impulsar o desarrollar información, capacidades, procesos, herramientas y estándares, entre otros, bajo principios de coordinación, derechos humanos, apertura gubernamental y generación de inteligencia.

El análisis detallado de cada una de las 40 prioridades de política permitirá identificar cuáles son aplicables de manera directa en Baja California Sur y cuáles no. Para su definición es importante tomar en cuenta la información recopilada sobre el problema de la corrupción en Baja California Sur, las capacidades institucionales y normativas del Estado y el diagnóstico elaborado.

Una vez finalizado el análisis, se debe trabajar con aquellas prioridades que no pudieron ser aplicadas de manera directa en el ámbito local con la finalidad de ajustarse atendiendo los alcances de la PEA. Esto es, se debe procurar su adopción indirecta.

Estas prioridades no son limitativas; durante el análisis deberá considerarse también la necesidad y viabilidad de incorporar otras propuestas que puedan desarrollarse por parte de actores locales, ya sean entes públicos o privados, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil u otros.

El propósito de la contextualización es promover el ajuste de las 40 prioridades sin perder la alineación que permita contar con acciones coordinadas, y de ser necesario, desarrollar prioridades adicionales, o características dentro de ellas, que atiendan manifestaciones concretas del fenómeno de la corrupción relevantes en el Estado con la finalidad de contar con acciones específicas que atiendan las particularidades del contexto.

Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right margin.

Handwritten signature in green ink at the bottom right.

Principio V. Incorporar secciones en las que definan premisas básicas sobre la implementación y evaluación de las políticas, que permitan guiar procesos futuros de planeación.

La implementación, es el proceso de transformar en resultados concretos los objetivos de una política.

El éxito de un proceso de implementación está condicionado por múltiples variables: Las variables del contexto en que se implantan las políticas, las características específicas, las necesidades específicas de las mismas políticas a implementar, los agentes que están a cargo de su implantación y las estrategias que utilizarán.

En esta fase se traducirán las prioridades establecidas en acciones, proyectos y compromisos, así como los responsables, plazos y productos claros que generen resultados en el corto, mediano y largo plazo. Para ello será necesario contar con pautas y mecanismos homologados de implementación que faciliten el proceso para todos los responsables.

Se elaborarán cuatro Programas de Implementación (uno por cada eje estratégico) en los que, tomando en consideración los diagnósticos y las prioridades identificadas, se establezcan acciones que serán implementadas por los distintos integrantes del SEABCS, o por los demás entes públicos del Estado.

Los Programas de Implementación de la PEABCS permitirán conjuntar esfuerzos e identificar actores relevantes que lleven a cabo las distintas acciones previstas. Cada Programa de Implementación será sometido a consideración de la Comisión Ejecutiva, previo a su envío al Comité Coordinador para su aprobación y eventual puesta en marcha.

La ejecución de los Programas de Implementación será gradual, el impacto esperado no será inmediato, sino que implica un proceso con productos y metas de cumplimiento en el corto, mediano y largo plazos, y progresiva haciendo que las acciones contenidas en los Programas de Implementación puedan estar sujetas a procesos de mejora continua, con base en los resultados que se obtengan de los sistemas de seguimiento y evaluación.

Las acciones contenidas en los Programas de Implementación deberán ser monitoreadas periódicamente para estimar el avance en el logro de resultados, y valorar su potencial ajuste o adición. Para tal fin, se integrarán informes anuales de ejecución que den cuenta de los avances, de acuerdo con los indicadores de cumplimiento y desempeño establecidas.

Con respecto al seguimiento y en completa alineación a la propuesta nacional, se

propone la creación de un Modelo Estatal de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MESEC).

El MESEC será un repositorio de indicadores y datos a través del cual se recabará, sistematizará, aprovechará y dará seguimiento periódico y continuo a un conjunto de indicadores que permita evaluar los avances y los retos que se observan a nivel de impacto, resultados y procesos, y que se relacionen tanto con el fenómeno de la corrupción en términos agregados como con las estrategias y acciones establecidas en esta propuesta de política y en los respectivos programas de implementación.

Esta aproximación comprehensiva del seguimiento y la evaluación pretende evitar limitarse a un concepto fijo de la corrupción, y permite que el modelo esté integrado por una gran cantidad de información que podrá ser analizada, en función de las preguntas de evaluación que busquen resolverse, la política o los programas de implementación. Como parte del MESEC se definirán dimensiones operativas determinadas por temáticas y niveles de desempeño que faciliten la búsqueda y el análisis de indicadores.

V. Principios de Contextualización en el Diseño de la PEABCS a la propuesta de PNA

Con la finalidad de que durante la fase de implementación de la PEABCS se definan acciones que además de contribuir a las prioridades nacionales, respondan a las necesidades específicas de Baja California Sur, es fundamental que para su diseño se considere el contexto local.

Principio I. Promover la apropiación del proceso de elaboración de la PEABCS, a partir de la colaboración entre la SESEA y el CPC, en el marco de las Comisiones Ejecutivas.

La elaboración de la propuesta de PEABCS requiere la coordinación de esfuerzos para desarrollar líneas que ofrezcan un entendimiento integral del fenómeno. Sin un compromiso real entre todas las partes que componen el SEABCS existe el riesgo de caer en sesgos metodológicos y proponer productos que no ofrezcan soluciones de política que correspondan a la realidad de las entidades federativas.

Por ello, se debe contemplar un componente técnico que permita generar un diagnóstico robusto, sin que ello signifique que se ofrecerá una explicación única y definitiva sobre las causas de la corrupción y sus efectos. Además, la PEABCS deberá dar cuenta del contexto estatal para lo que es necesario un componente de vinculación con diversos actores relevantes para la contextualización del fenómeno de la corrupción; ello permitirá que la PEABCS se elabore con base en acuerdos valorativos y expectativas que faciliten la construcción de estrategias y acciones de política en la fase de implementación.

De conformidad con la normativa, la Comisión Ejecutiva, es la encargada de la

elaboración de propuestas de políticas integrales enfocadas al control de la corrupción. Por ello la SESEA deberá ser líder en el proceso de diseño, coordinación e integración de la PEABCS, ya que cuenta con la capacidad normativa y técnica institucional. Mientras que la colaboración con el CPC es fundamental para el involucramiento de diversos actores de la sociedad en este proceso.

La articulación por la SESEA y el CPC permitirá contar con estructura técnica y metodológica, recabar datos e información de diversas fuentes, considerar la opinión de expertos locales en temas de corrupción, involucrar a la sociedad civil en el proceso de diálogo y recibir comentarios por parte de las instancias que integran el CC.

Principio II. Detonar el diálogo con actores sociales interesados y que promuevan el involucramiento activo de las instituciones integrantes de los Comités Coordinadores.

El acercamiento al fenómeno de la corrupción por parte de los diversos actores sociales, políticos y gubernamentales genera perspectivas variadas sobre las causas y posibles soluciones al problema; además, las acciones que estos actores llevan a cabo pueden ser experiencias generadoras de nuevas tendencias, mejores prácticas y propuestas innovadoras que pueden ser replicables en otros contextos.

Por ello, es imprescindible contar con el involucramiento de la sociedad organizada y las instituciones integrantes de los Comités Coordinadores a través de distintos ejercicios de participación liderados por la SESEA y el CPC. Mediante estos ejercicios se buscara la apertura de espacios de colaboración en los que se intercambien perspectivas sobre la percepción del problema de la corrupción, sus causas y posibles soluciones en el ámbito local.

En el marco de la Comisión Ejecutiva, deberá aprobarse el desarrollo de una Consulta Pública Estatal, para consideración del CC.

Esta consulta pública deberá partir de la premisa que, además de los insumos ya disponibles y de otros esfuerzos de colaboración realizados por el CPC y la SESEA con otros actores, es fundamental recabar opiniones, propuestas e insumos de al menos tres audiencias estratégicas que permitieran enriquecer los contenidos y alcances de la PEABCS, bajo un enfoque de orientación a las necesidades del ciudadano.

Las audiencias serán:

- a. **Población abierta:** percepciones y opiniones acerca de las causas y las posibles vías de solución al problema de la corrupción (**Consulta Ciudadana en Línea y en Campo**).

- b. Expertos: opiniones y propuestas para entender y enfrentar la corrupción, sustentadas en estudios o investigaciones realizadas en sus instituciones o como parte de su trabajo académico (**Focus Group**).
- c. Audiencias estratégicas locales: opiniones y propuestas que permitan contextualizar los alcances de la PEABCS a las realidades y problemáticas concretas que se enfrentan en los 5 Municipios que integran el Estado (**Foros Municipales**).

En este sentido, la integración de las PEA deberá contemplar el diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil con presencia a nivel local o agenda regional, así como instituciones académicas estatales; lo más importante es la interacción y concertación estratégica de los actores sociales con la finalidad de retroalimentar la propuesta, atendiendo sus recomendaciones para fortalecer los atributos y características de las prioridades de política.

Es de vital importancia el involucramiento de las instituciones integrantes de los CC en este proceso ya que son éstas las encargadas de llevar a cabo los procesos relativos al control y combate a la corrupción. Su experiencia en estos temas permitirá un acercamiento práctico al problema de la corrupción, el refinamiento del diagnóstico y favorecerá la integración de prioridades enfocadas en las necesidades específicas del Estado, por lo que deben contar con canales para emitir comentarios y recomendaciones sobre los avances que se vayan presentando en la integración de la PEABCS.

Principio III. Articular procesos, en colaboración con los integrantes del Comité Coordinador y con organizaciones locales, de recopilación, procesamiento e integración de datos y evidencia.

Es necesario conocer estadísticas y datos de manera agrupada y desagregada, para analizar los impactos de la corrupción en los diversos ámbitos de la sociedad sudcaliforniana.

Se deberá establecer modelos de colaboración y coordinación con diversos actores de la sociedad sudcaliforniana involucrados con el tema y con las instancias que generan información sobre el fenómeno de la corrupción a nivel local. Ello facilitará el proceso de recopilación y permitirá abarcar el mayor número posible de fuentes de información.

Deberá ponerse énfasis en que dichos actores son una fuente valiosa de información, datos y estadísticas y pueden facilitar el acceso a datos y evidencia que enriquezca y contextualice el diagnóstico.

Tomar como base la información contenida en la propuesta de PNA, las bases de datos y documentos de interés disponibles.

Los datos procesados por la SESEA deberán organizarse por temáticas de la corrupción, nivel de gobierno y niveles de afectación económica y política. Posteriormente, a estos datos se deberán aplicar criterios de discriminación, como la contundencia y la repetición del problema, así como del dato en los informes técnicos.

El análisis, organización y discriminación de la evidencia y datos podrá realizarse en conjunto o con la ayuda de instituciones académicas y especializadas en la materia. Sin embargo, es fundamental que la SESEA sea la responsable del análisis de datos que permita contextualizar los diagnósticos y desagregar atributos en las prioridades de política.

Principio IV. Incorporar los ejes estratégicos y prioridades necesarios que permitan atender dimensiones del fenómeno de la corrupción no considerados en la propuesta de PNA.

Las recomendaciones referentes a la alineación permiten contar con un esquema base para la PEA, partiendo de los elementos contenidos en la propuesta de la PNA y con los insumos obtenidos de las dos recomendaciones previas, se deberá llevar a cabo un análisis que permita establecer si los elementos del esquema base son suficientes o si es necesario incorporar ejes estratégicos y prioridades que atiendan características particulares de Baja California Sur.

Es posible que haya dimensiones particulares dependiendo del contexto local que no hayan sido consideradas en la propuesta de PNA por su carácter nacional, pero que deberán incluirse en la PEABCS de considerarse muy relevante con base en la evidencia.

Revisar el proceso de construcción de la propuesta de PNA y emularlo con un paradigma local; ello implicará llevar a cabo un análisis y estudio exhaustivo de informes, información oficial y estadísticas locales con el objetivo de diagnosticar con mayor precisión las causas de la corrupción en el Estado.

Concluido ese ejercicio y verificados los ejes y prioridades de la propuesta de PNA, se tendrá un panorama más amplio y certero para decidir si es necesario añadir algún eje estratégico, transversal, tema y/o prioridades, o bien, simplemente ajustar los existentes al contexto estatal.

Esta verificación conlleva la consideración de programas y acciones en específico, por lo tanto, contemplar la adición de ejes y/o prioridades debe ser el resultado de haber agotado una vinculación con la propuesta de PNA a la problemática estatal.

De esta forma, la PEABCS tendrá como mínimo los cuatro ejes estratégicos de la propuesta de la PNA y las 40 prioridades y, dependiendo de los hallazgos derivados del diagnóstico, pudiendo incluir nuevas prioridades y/o ejes.

La definición de nuevas prioridades y/o ejes deberá realizarse siguiendo el modelo y metodología de la propuesta de la PNA, es decir, desarrollar su diagnóstico y justificar con evidencia disponible y verificable cada una de sus partes.

Principio V. La reforma constitucional en materia anticorrupción publicada el 27 de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para coordinar a las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción. El 18 de julio de 2016 fueron publicadas las leyes secundarias que dan vida al SNA.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Mexicana vigente, el Municipio, es un ente autónomo que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; se encuentra vinculado jerárquicamente con el gobierno estatal; tiene libertad para administrar su presupuesto; posee facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales, y su gobierno es electo de manera directa, democrática y popular. Es un espacio territorial constituido por un grupo de pobladores que representan el mismo interés de demanda de bienestar y calidad de vida, velado y administrado por ellos mismos.

Es preciso reconocer que el municipio se ha convertido en una figura jurídico-política, con características particulares que le han dado preponderancia y al cual se le considera el soporte base en la relación gobierno-ciudadanía; pues al ser la autoridad local más cercana, la de primer contacto, es la más susceptible de ser receptiva de la voz de sus ciudadanos y por consiguiente es la que en teoría mejor conoce sus necesidades, los municipios son un elemento que contribuye a mejorar la situación del Estado en general.

Dentro de este enfoque, el municipio se convierte en una pieza esencial para coordinar los esfuerzos dentro del SEABCS.

Considerando esto, se sugiere incorporar en la PEABCS prioridades y/o atributos que, de acuerdo con el contexto estatal, vinculen a los municipios en las estrategias de control de la corrupción para lograr un mayor impacto en la implementación de la PEABCS y contribuir al logro de los objetivos de combate a la corrupción del Estado evitando la fragmentación de los esfuerzos y acciones.

VI. Aprobación y Publicación

Una vez concluida la fase de diseño, la PEABCS deberá ser aprobada por la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva la presentara al CC para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado.

La SESEA, el CPC y las instituciones que conforman el CC, deberán socializar la PEABCS y asegurar que sea del conocimiento de todos los ciudadanos.

Aprobada y publicada la PEABCS, resultará factible avanzar en la elaboración y puesta en marcha de programas de implementación, aterrizando a través de acciones, proyectos y compromisos concretos las distintas prioridades ahí definidas. De igual manera, y en paralelo a la elaboración de propuestas de PEABCS, se podrá avanzar en la identificación de un número acotado de compromisos anticorrupción que permitan generar resultados de valor en el corto plazo en sectores específicos de interés para las instituciones.


FIRMA

C.P.C. JUAN LIBORIO FENECH CARDOZA
PRESIDENTE DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE
BAJA CALIFORNIA SUR.


FIRMA

MTRO. RAMIRO ULISES CONTRERAS
CONTRERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO.

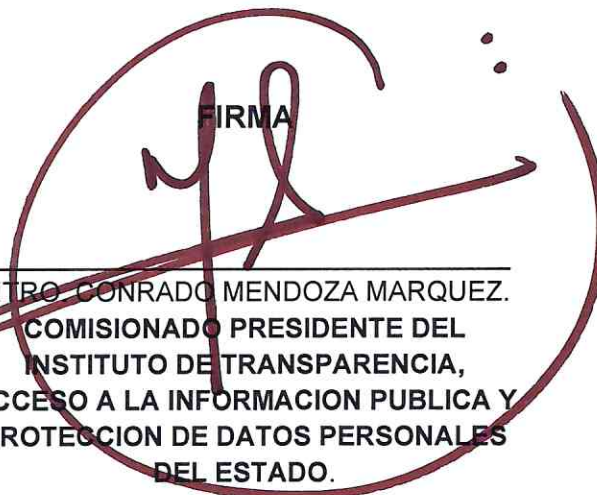

FIRMA

MTRA. SONIA MURILLO MANRIQUEZ.
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO.



FIRMA


C.P. RICARDO JUÁREZ MIRANDA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN
REPRESENTACIÓN DEL LIC. JULIO
CESAR LÓPEZ MÁRQUEZ, AUDITOR
SUPERIOR DEL ESTADO.

FIRMA


MTRO. CONRADO MENDOZA MARQUEZ.
COMISIONADO PRESIDENTE DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO.

FIRMA


LIC. CARLOS ADRIAN LEON ZEPEDA.
CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO. REPRESENTANTE
DEL LIC. DANIEL GALLO RODRIGUEZ,
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO.

